

correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos, en la forma que se expresa a continuación:

- a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual al del puesto solicitado: 7 puntos.
- b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
- c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
- d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5 puntos, con la misma distribución según la duración de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Antonio Porras Posadas.
 Presidente suplente: Don Francisco Javier del Río del Río.
 Vocales:

1. Don Antonio Angel Sánchez Domínguez.
2. Don Jesús Tomás Ventura Villanueva.
3. Don Víctor Salamanca Maesso (CC.OO.).
4. Don Alfonso Balsera Rosado (CSI-CSIF).
5. Don José Rafael Romero Cobos (UGT).

Vocales suplentes:

1. Doña María Dolores Baena Alcántara.
2. Don Francisco Hidalgo Torralba.

Vocal Secretaria: Doña Fuensanta García de la Torre.
 Vocal Secretario suplente: Don José Luis Reyes Lorite.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA núm. 41, de 9.4.2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad.

Con fecha 21 de mayo de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución de 19 de abril de 2002, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejercicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada

convocatoria, en relación con la fase de concurso, y a la vista de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria, así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad los aspirantes que se citan en el Anexo a esta Resolución.

Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se publica la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo podrán los interesados interponer recurso de alzada ante este Rectorado en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 7 de enero de 2003.- El Rector, Guillermo Martínez Massanet.

ANEXO UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Nº ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE	PUNTUACION TOTAL
1	31257443Y	OROPESA ROSAS, MANUELA	17,58
2	31264629Q	DELGADO RIVERO, ANTONIA	17,33
3	31250407P	CASANOVA BORREGO, JUAN CARLOS	17,15
4	31256509S	PÉREZ REINA, AMPARO	16,90
5	32863178L	PÉREZ GIMENO, Mª CARMEN	16,83
6	45075126W	SAN MARTÍN PALOMARES, JOSÉ A.	16,81
7	31240139K	CEA VALLS, JUAN A. DE	16,79
8	31326535Y	GALERA BAENA, MANUELA	16,71
9	44027508B	MACHADO FURCO, SILVIA	16,48
10	31250531V	OTERO SÁNCHEZ, ANTONIA	16,31
11	31250170R	GUTIÉRREZ DE LA TORRE, MANUELA	16,11
12	11712765S	AVEDILLO CORDERO, DANIEL	16,09
13	52301693S	CASAS GONZÁLEZ, JOSÉ	15,84
14	01823381X	AMO FERREIRA, Mª ANGELES DEL	15,79
15	31228302Y	GUTIÉRREZ EGEA, AGUEDA	15,76
16	31230490D	ORTEGA SASIÁN, LOURDES	15,72
17	32847601J	DOMÍNGUEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS	15,63
18	31391210M	CONDE CANTERO, Mª ROSARIO	15,58
19	31202725M	VELARDE DÍEZ, ENRIQUETA	15,54
20	31244764T	COLÓN GAVIÑO, Mª ANGELES	15,41
21	31204365N	VALIENTE CORRALES, EDUARDO	15,40
22	31235890G	PÉREZ RODRÍGUEZ, Mª PILAR	15,36
23	45279526R	CALERO BOHÓRQUEZ, PILAR	15,21
24	31231440Q	SANTANA VICENTE, ANA MARÍA	15,11
25	31256581H	PÉREZ REINA, Mª ISABEL	15,11
26	31252465L	DIEGUEZ OLMO, Mª CARMEN	15,09
27	31266892W	PARDAL BENÍTEZ, ROSA	15,05
28	31248463L	SÁNCHEZ MOLERO, MARÍA	14,87
29	31251280F	SUÁREZ VARGAS, JOSÉ M.	14,87
30	31647083A	PUERTO HERNÁNDEZ, MERCEDES	14,81
31	31215290N	SÁNCHEZ HERRERA, FCA. DE PAULA	14,81
32	75742346B	MARCHANTE SÁNCHEZ, MILAGROSA	14,79

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se crea el puesto de trabajo de Viceintervención en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), relativa a la creación en la Plantilla de Personal Funcionario de esa Corporación de un puesto de colaboración de la Intervención General denominado Viceintervención reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría-Intervención, con complemento de destino nivel 26 y sin complemento específico, sobre la base del Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2002.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 126, 159 y 165 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en los artículos 2.g) y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre y en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Crear en la plantilla del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) el puesto de Viceintervención, con complemento de destino nivel 26 y sin complemento específico, para su desempeño por funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de enero de 2003.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 20 de enero de 2003, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa Estacionamientos y Servicios, SA, de Granada mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., de Granada, ha sido convocada huelga desde las 0,00 horas del día 29 de enero de 2003 a las 24 horas del día 30 de enero de 2003, y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la mencionada empresa.

Si bien la Constitución, en su artículo 28.2, reconoce a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., de Granada, prestan un servicio esencial para la comunidad, relacionado con la libre circulación de los ciudadanos, ya que hay que tener en cuenta los efectos que produce una huelga en este ámbito, especialmente en lo que afecta a la seguridad de las personas, dado que pueden quedar seriamente comprometidos los servicios urgentes, de incendios y ambulancias por la obstaculización de vehículos en la calzada o como consecuencia de colisiones de tráfico que impidan el normal funcionamiento de los vehículos. Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los mismos en el Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los servicios mínimos necesarios, no habiendo sido ello posible; de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales aplicables, artículos 19, 28.2, de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,